

DESNACIONALIZACION DE LAS LUCHAS INDÍGENAS Y POPULARES EN EL MARCO DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ (PPP)

La instrumentación de los tres planes intervencionistas de nuevo cuño por parte de los EE.UU. en el territorio latinoamericano tiene intereses preclaros de carácter económico-financiero, de innovación de recursos de control social que legitimen los nuevos negocios, las privatizaciones de los patrimonios públicos, la desigualdad y exclusión social, conllevando todo esto a estructurar un nuevo campo de poder en la región donde se anclan los planes Dignidad, Colombia y Puebla Panamá.

Justamente cuando se está agotando el modelo de dominación tradicional que tenía como protagonista al empresario criollo, patrimonialista, lactado por el Estado y protegido por las fuerzas oficiales del orden y, al momento que se desanudan las formas de control social (partidos políticos, sindicatos, asociaciones corporativizadas por el Estado, cuerpos policiales, etc.) aparecen los Planes con la intención de recuperar el orden con acciones novedosas que coadyuven a la política neoliberal privatizadora que apunta hacia el control de los recursos del agua, el ecosistema y la energía.

La parte operativa de los tres Planes no ha sido tarea fácil, ha encontrado resistencia en los pueblos indígenas y la población campesina, especialmente en la zona del Chapare, Bolivia, y en el sur de Colombia; no obstante la violencia ha existido como el recurso más eficaz para resolver las diferencias y los conflictos de intereses, muchas veces al margen del ámbito estatal pero más cercano a la esfera paramilitar, a causa de que al encontrarse en una reestructuración las distintas fracciones y grupos de la vieja clase dominante, los controles político-sociales se han desajustado y no funcionan con eficacia, por lo que han echado mano a los a la conformación, contratación y operatividad de los grupos paramilitares para resolver toda contingencia que ponga en riesgo los intereses de las empresas y los nuevos propietarios.

De esta manera funcionan el Plan Colombia y el Plan Dignidad, pero ya se asoman los mismos recursos paramilitares y de violencia en el corredor del Plan Puebla Panamá, lo cual nos indica que nos acercamos a una problemática compleja donde la violencia provocada por grupos armados que actúan al margen del estado va ir incrementándose en la medida que vayan aplicándose los recursos de la privatización de las empresas que manejan el agua, la energía y en las poblaciones donde se sitúan los bancos biológicos.

Los soportes financieros y los ganadores de los Planes

La esfera bélica de los planes en ejecución es el verdadero negocio de la guerra, puesto que detrás de cada incursión de carácter militar está una empresa y un grupo de inversionistas que lucran con el dolor de los pueblos latinoamericanos.

El soporte militar está dividido en dos aspectos, los que proporcionan el equipo de software y el hardware. Veámoslo:

VER CUADRO APARTE

Las cifras nos indican que la guerra también es un negocio próspero, principalmente para los EE.UU. y particularmente las empresas asociadas a la producción, asesoría y mantenimiento de dispositivos bélicos, por ello cada aplauso, defensa, consentimiento o aprobación que hagamos del Plan Colombia, Plan Dignidad y Plan Puebla panamá, es una pequeña, pero significativa ayuda para que las empresas vinculadas al exterminio, a la paz sepulcral sigan posesionándose del cuerpo de nuestros pueblos latinoamericanos.

El eje estratégico de los Planes

El Plan Colombia se conecta hacia al sur con el PLAN DIGNIDAD, el cual se inició en abril de 1998 hasta el 2001, destinado a la erradicación de los cultivos de la coca en la región del Chapare, pero fue prolongándose sin mediar justificación alguna, lo que hace presumir que se va a prolongar otros años más.

En la letra se conoce que el Plan Dignidad intenta organizar una lucha contra el narcotráfico, sustentada en cuatro pilares: erradicación, interdicción, desarrollo alternativo y prevención, pero tras de su plataforma divulgada está el plan militar y terrorista que se ha venido desarrollando es el país boliviano desde hace varios años, recrudecidos en los últimos meses con el nacimiento del Movimiento al Socialismo (MAS) que tiene como figura principal al cocalero Evo Morales quien se opone férreamente al plan anticocalero.

Desde los primeros días del mes de Abril de 1998 a agosto del 2002, los habitantes de Amayapampa, Capasirca, Llallagua y el Chapare, han vivido un verdadero estado de sitio, en un claro proceso de militarización de la región. Cientos de efectivos policiales y militares han invadido violentamente las tierras del Chapare, cometiendo un sinnúmero de abusos y asesinatos que atentan contra los más elementales derechos y libertades individuales.

La intención de erradicar el cultivo de la hoja de coca y remplazarla por cultivos alternativos es la falacia que se maneja ante la opinión pública, porque en la práctica ha sido ineficiente y distorsionada con lo que dice en el documento oficial. Las comunidades que han aceptado el programa oficial del Plan se han quedado con la ayuda a medias, los productos del achote y la piña que han obtenido del cultivo no se pueden comercializar por falta de vías de comunicación, los mercados no son receptivos para ese tipo de producto, los micro créditos no fluyen, las fumigaciones dañan la salud y matan a los animales domésticos, lo cual irrita a los habitantes de esas comunidades, quienes vuelven a sembrar la coca como un retorno a las prácticas tradicionales.

Si observamos lo que dice el Plan Dignidad, no se diferencia del Plan Colombia ni del Plan Puebla Panamá y los tres se conectan con la estrategia que elaboró EE.UU. para el hemisferio.

El eje de los tres planes (Dignidad, Colombia y Puebla Panamá) está constituido por los siguientes conceptos Democracia, reducción pobreza, esfuerzos antidrogas, consecuencias ambientales del narcotráfico y apoyo a los Estados Unidos en su lucha antiterrorista; de ahí que en los tres documentos haya un énfasis por “Fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la pobreza y mejorar la cooperación regional contra el tráfico de drogas”, aunque no dicen cómo se instrumentalizaría la estrategia en cada uno de esos aspectos, sí se nota un fuerte incremento de paramilitarismo en las tres regiones, básicamente en Colombia con la administración Uribe, quien ha incorporado a la población civil campesina y marginal

popular en las labores de contrainsurgencia y de claqué, fomentando el paramilitarismo disfrazado; de igual manera se ha notado la tendencia incremental de grupos civiles armados que atacan permanentemente a los municipios libres y a los dirigentes zapatistas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero; en Bolivia la represión ha crecido a partir de la fuerza que ha mostrado el MAS después de las elecciones de este año.

La propuesta Bush no es distinta a la que predominó con la Iniciativa Regional Andina (ARI) que se presentó a los reporteros el 16 de mayo del 2001 en una sesión informativa en el Departamento de Estado. El enfoque del presidente Bush en relación con las dificultades sociales y económicas más urgentes de los Andes se basa en la admisión de que "todos estos problemas persistentes están relacionados entre sí" y "ninguno... puede atenderse por separado, lo que denota una persistencia de ligar todos los problemas al narcotráfico, lo que facilita el intervencionismo militar bajo el manto de la lucha contra la siembra ilícita, pero en el fondo busca contrarrestar los brotes de insumisión que están brotando en el agro de los países latinoamericanos, en especial los que se encuentran dentro de los tres planes.

La iniciativa de los planes, en la letra, promueve el crecimiento de largo plazo pero dentro del marco del modelo neoliberal y el libre comercio, lo que nos da a entender que por los pocos años que tienen los planes, menos de diez años, los efectos no llegarán pronto. Con respecto a lo de apuntalar las instituciones democráticas y apoyar medidas de las naciones anfitrionas para combatir la corrupción, reformar los sistemas judiciales y adoptar políticas fiscales sólidas, todo indica que debe darse una reforma profunda del Estado, pero no es así. De lo que se trata es de ir marginando a los partidos políticos de los debates sobre los asuntos económicos, dado que los acuerdos en este ámbito se dan fuera del país y con actores externos; ir minando la credibilidad de los partidos políticos en la medida que no participan ni deciden sobre los asuntos estratégicos de la nación, tales como reforma al sector eléctrico, apertura de los mercados, acuerdos bilaterales o regionales de comercio, privatización de recursos nacionales, endeudamiento con los organismos financieros internacionales, etc.; además, pone de relieve el papel del comercio liberalizado como estímulo económico y aboga por la renovación de legislación tal como la Ley de Preferencia Comercial Andina a fin de que embonen con la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA- que se pondrá en ejecución en el 2005.

Dentro del ALCA está un recurso de gran interés para los EE.UU. el gas boliviano, para lo cual se han iniciado los trámites correspondientes para que se limen las asperezas diplomáticas entre Bolivia y Chile a fin de interconectar las plantas bolivianas con el norte chileno (Arica y Iquique) zona que ha subsistido sin apoyo ni inversiones en los últimos años. Las pláticas anuncian resultados de una inversión inicial de 1.900 millones de dólares de un total de seis mil millones para financiar el gasoducto y las exportaciones del gas hacia suelo norteamericano.

La intención de promover la democracia liberal en Bolivia, Colombia y la zona del sur de México hasta Panamá, además de los intereses económicos y recursos naturales públicos, es la de marginar toda iniciativa política que nazca de las comunidades indígenas y/o populares porque no se encuentran institucionalizadas como partidos políticos ni se realizan dentro de ellos, lo que afectaría el fortalecimiento de las democracias nacientes y las instituciones vigentes.

Como se puede observar, la estrategia de los tres planes no está orientada a respaldar la nueva democracia que se está dibujando en América Latina, tampoco a estimular la

participación políticas de los nuevos actores, sino que tiene una definición clara, fomentar el paramilitarismo para contrarrestar el auge de las protestas que se deriven de la exclusión y privatización de los servicios públicos, en especial el agua y la energía; detener por medio de la represión, no estatal, pero sí paramilitar, los levantamientos de los actores insumisos que se revelan en el campo y en los sectores marginales de las ciudades; remplazar la ineficacia de los gobiernos, los partidos políticos y del modelo imperante para generar empleos, por agremiaciones que doten de un oficio a los pobladores de las zonas conflictivas en labores de espionaje contrainsurgente, de lanceros y vocinglero hasta que las personas terminen convertidos en felones sociales.

EEL PPP

Aparece como una parte o complemento del Plan Nacional de Desarrollo en México, pero involucrando a la región centroamericana y al Istmo de Panamá, lo cual hace que no sea propiamente nacional.

Su objetivo visible es ser facilitador y gestor para la inversión externa y privada con fin de contener los flujos migratorios hacia los EE.UU., a su vez abrir el compás para la privatización de los recursos públicos, principalmente las empresas que suministran agua, energía y telefonía en el área.

Es digno de destacar que la amplia región que abarca el PPP entre el estado de Puebla y el territorio panameño existe el banco biogenético más significativo, cuenta con grandes yacimiento y producción de petróleo en México, El Petén y reservas potenciales en Nicaragua y Costa Rica; maderas abundantes y finas, con recursos de agua abundante, la tierra es muy rica y fértil sirve para la agricultura y ganadería, pero esta habitada por población indígena y campesina.

La riqueza de los recursos ha despertado el interés en las empresas trasnacionales pero quieren esas tierras limpias de gente, principalmente de los inconformes o de los que cuentan con recursos orgánico-movilizador para contrarrestar las futuras inversiones.

He aquí el primer reto del PPP, cómo instrumentalizar una estrategia de limpieza social para fomentar las inversiones y para ello ha mirado varios proyectos para obligar a cientos de miles de pobladores a que abandonen su tierra de manera pacífica, promoviendo la siembra de cultivos de la palma africana, vainilla, flores entre otros que acaban ahogando la economía campesina por falta o distorsión provocada de mercado. Existe la estrategia radical que busca, bajo toda circunstancia, promover el paramilitarismo en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua para sofocar los conflictos que se engendren y garantizar una situación de estabilidad política, gerenciada por el miedo y el terror, que de ser persistentes en amplios sectores sociales puede desembocar en fobias, timidez, bajo grado asociativo y desconfianza en el otro.

Ahora bien, si posamos los ojos y nuestra atención en los debates más recientes en los países que integran el PPP, la temática gubernamental gira entorno a la apertura de los sectores de la electricidad, petroquímica, agua y telefonía, debido a que existe el marcado interés por construir 72 presas hidroeléctricas, 22 en Chiapas, las cuales se deben edificar con soporte de inversión privada.

Otro aspecto relevante es la deficiencia energética de los EE.UU. situación preocupante para la administración Bush, quien ha destacado la necesidad de

Norteamericanizar los mercados de energía, en los compromisos que asumió en

Québec al afirmar que “el precio del petróleo puede incentivar a las compañías norteamericanas a realizar labores de exploración en ambos lados de nuestra frontera; hay mucho trabajo para hacer juntos”, dijo el mandatario. Agregó, "Si los proveedores canadienses y mexicanos de petróleo y electricidad están buscando un mercado ya lo encontraron en Estados Unidos. Tenemos una deficiencia energética, requerimos más energía en nuestro país", respondió el presidente Bush cuando fue interrogado en una conferencia de prensa sobre la iniciativa de crear un mercado continental de energía, contenida en el ALCA.

"Lo que puede hacer Estados Unidos es proporcionar mercados con mejores oleoductos, otorgando permisos transfronterizos, recibiendo los abastos de gas natural sin importar su país de origen", estableció el presidente de Estados Unidos.

En particular, dijo que su país puede trabajar "con nuestros amigos de México" en el desarrollo de proyectos de electricidad en la zona fronteriza común.

La pregunta que debemos hacernos es, quien garantiza la inversión en una región vulnerada por la violencia, donde la mayoría de los conflictos se han dirimido a través del recurso de la confrontación, provocando la consolidación de una cultura contestataria ante el vacío de autoridad legal y la proveniencia de enclaves autoritarios (actorales e institucionales) que han desplazado la posibilidad de arreglos mediados por la legalidad.

El vacío institucional y la ilegitimidad de las autoridades en muchos lugares donde se piensa instaurar el PPP, no garantizan resolver las diferencias a través del marco normativo de un estado de derecho, lo que va a desatar innumerables conflictos armados y desplazamientos de numerosas familias, por lo que se avecinan dos fenómenos con características novedosas, desplazamiento migratorio interno por la confrontación paramilitar contra comunidades campesinas y desgarramientos internos por familiares que se incorporaren en las labores de fisgón en zonas conflictuadas.

El PPP envuelve a Panamá

Las cifras oficiales y las que se manejan en las investigaciones regionales indican que la economía panameña reciente una crisis económica que se agudiza, producto de los vaivenes de la economía mundial y del perfil económico del istmo, cuya característica principal es el comercio; además los Estados Unidos, muy sutilmente ha desatado una ofensiva contra ese país, presionándolo para que negocie un acuerdo de "fuerzas visitantes" que permitan a los militares de EE.UU. utilizar abiertamente Panamá como base de operaciones.

Aunado a lo anterior, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos cerró las pinzas y sancionó a Panamá rebajando a la aviación panameña a categoría 2, lo que se traduciría en un desastre comercial para las empresas panameñas que no podrían tener vuelos a territorio estadounidense y tendrían que utilizar conexiones con aerolíneas que sí puedan entrar a ese país. La "sanción" ha sido apelada por las autoridades panameñas debido a que la medida ha sido sorpresiva, inconsulta y represiva, pero todo conduce a doblar la actitud pasiva del gobierno de Mireya Moscoso ante el pedido de colaboración que le ha solicitado EE.UU. para que coadyuve en la aplicación del Plan Colombia,

principalmente en la zona del Darien, territorio por donde se desplazan algunos grupos insurgentes colombianos.

Las presiones contra Panamá llevan a la administración Moscoso a aceptar el PPP pero no tanto en su versión de libre comercio y apertura de mercados, porque eso ya acontece en el país desde hace muchos años, puesto que Panamá fue el primer estado latinoamericano que vivió directamente la globalización, su enclave estratégico lo ha convertido en el país de América Latina más vinculado al comercio internacional. Lo que le interesa a los EE.UU. y donde Panamá se siente más incómodo, son los asuntos militares que trae el PPP, pero velados por la lucha antinarco. Unas de las medidas que se han aplicado son las imposiciones de medidas bancarias y restricciones financieras, supuestamente antinarco lavado pero que en el fondo agravan la crisis económica y ponen en un predicamento el desenvolvimiento de las finanzas del país por lo que tienen que acudir a los “buenos” oficios de su embajada ante el Departamento de Estado norteamericano para que oxigene las presiones a cambio de acuerdos político-militares.

Tales acciones buscan imponer al país una mayor y más activa participación en el Plan Colombia y la guerra que se libra en ese país vecino, aunque la Embajada de E.U. haya negado todo interés en reabrir una base militar en suelo panameño, existen fuertes indicios y pruebas que esto no es cierto, porque las pistas en Matetí y los movimientos en la zona del Darien nos dicen todo lo contrario de lo que asevera la parte norteamericana.

LOS ACUERDO EN PANAMÁ

El Gobierno Nacional firmó, sin publicarlo ni presentarlo a la Asamblea Legislativa, un acuerdo negociado en secreto con el Gobierno de Estados Unidos de América, llamado *Arreglo Complementario 2002*, cuyo propósito es una ampliación del Arreglo de 1991, que tampoco fue presentado a la Asamblea ni analizado públicamente, que menoscababa los intereses panameños. El Arreglo Complementario 2002 da paso al sobrevuelo sin control por todo el país de aviones militares norteamericanos y el abordaje de sus soldados en barcos de bandera panameña y de otros países en alta mar, al igual que en aguas panameñas.

Otro acuerdo que se firmó entre EE.UU. y el gobierno anterior a Moscoso (Pérez Balladares) bajo el secretismo que se utiliza en la política panameña, fue el de establecer un Centro Multilateral Antidrogas, (CMA) cuyo fin era contener el flujo de drogas que transitaban por el país con destino a Norteamérica, que buscaba bajo toda circunstancia entregar la conducción de esta política a personal de la DEA (Drug Enforcement Administration) lo cual ha sido cuestionada por el poco éxito en la lucha contra las drogas, pues la efectividad del rastreo de naves aéreas o marítimas es relativa, ya que el narcotráfico utiliza otras vías terrestres y marítimas, aprovechando la liberalización del comercio; además, la solución no está en la militarización de esa lucha, sino en la restricción de la demanda y en otras formas de restringir la oferta

MOVILIZACIÓN MILITAR EN NICARAGUA

Este país centroamericano tiene una particular percepción sobre los militares norteamericanos, construida a partir de la guerra que vivió durante 10 años de la administración Sandinista; no obstante, la necesidad de ir sensibilizando a la población para que sea receptiva a este tipo de movilizaciones y desplazamientos militares, la Embajada Norteamericana en Nicaragua ha armado arreglos con la administración de Arnoldo

Alemán y la recién instalada de Bolaños para que contingentes militares visiten el país y desarrollen labores comunitarias, cuyo fin es el de despertar los hilos sensitivos de los campesinos para que vean en los soldados extranjeros un depositario de sus confianzas, toda vez que le está resolviendo problemas y necesidades que han demandado desde hace años.

Es conocido en el ámbito de los académicos y especialistas en asuntos de guerra y conflictos, que en Centroamérica las zonas más violentas son las rurales, porque han vivido en un entorno vacío de estructuras institucionales y carente de leyes que posibiliten arreglos al margen de la confrontación. Este déficit ha descomprimido las fuerzas contestatarias y los impulsos emocionales hasta colocarlos en un plano donde se resuelven los conflictos de manera directa, confrontativa y muchas veces aplicando la justicia por su propia mano.

Indudablemente que esta situación no es la óptima para las pretensiones de los inversores que están tras del PPP; además, los ímpetus y emociones pueden ser redireccionados y pueden atacar, en algún momento, a los representantes de las empresas que tienen interés en aplicar sus recursos en el área, lo que podría en riesgos las inversiones o las expropiaciones de tierras a los campesinos.

Teniendo presente la potencial situación, los agentes norteamericanos han puesto en marcha el plan de visita comunitaria con cuatro mil militares de Estados Unidos para que ingresen al país, con el compromiso público de construir escuelas, centros de salud y proporcionar asistencia médica gratuita a las comunidades marginadas del campo.

A fin de que el plan vaya a la par de los cabildeos del PPP, la Asamblea Nacional autorizó el ingreso escalonado al territorio nacional de un contingente de 3.665 efectivos militares y personal médico de Estados Unidos quienes atenderán e irán a las poblaciones de los municipios de Juigalpa, Santo Tomás y Bluefields, claro está coordinando sus acciones con el alto mando del Ejército de Nicaragua.

El decreto establece que el primer contingente de quince efectivos ingresó al país entre el 23 de abril y el dos de mayo del 2001. Un segundo grupo de cincuenta efectivos permanecería en Bluefields del 21 al 29 de mayo, y un tercero, que sería de 3.600 militares, programaría su arribo el 12 de diciembre y partiría hacia Estados Unidos el 30 de junio del año 2002, con una rotación de 300 efectivos cada quince días hasta completar la totalidad.

Los boletines de prensa que han circulado en torno a este acontecimiento, consignan que se programaron la visita de 25 doctores militares que se desplazaron por Bluefields, con visitas de dos semanas, atendiendo a cinco mil nicaragüenses en consulta y medicina gratis. Fue un tipo de servicio comunitario les permitió conocer cómo se comporta y cuales son las necesidades del pueblo, aspectos fundamentales para realizar un trabajo de cooptación a futuro.

PARAMILITARISMO EN GUATEMALA

La práctica paramilitar en Guatemala data desde 1981, cuando el gobierno de Romeo Lucas García organizó, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), cuyo objetivo era el de aniquilar las comunidades indígenas y campesinas que brindarían apoyo a las fuerzas insurgentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)

Con la firma de los Acuerdo de Paz (29 de diciembre de 1996) las PAC fueron disueltas y el gobierno no les reconoció ningún estatus de cuerpo institucional, por lo que no fue

depositaria de ningún beneficio compensatorio (jubilaciones o pensiones de guerra), viéndose forzados a retornar a sus lugares de orígenes, las fincas o poblados rurales.

Con el arribo del presidente Alfonso Portillo en el año 2000, respaldado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) las PAC se reactivaron con paros y bloqueos para forzar al presidente en turno a negociar y obtener un apoyo económico de 20 mil Quetzales por persona (2.500 Dólares), lo cual lograron, apoyados por la gestión del General retirado Efraín Ríos Montt, quien hoy preside la mayoría del congreso de ese país. La relación de las PAC con el FRG y Ríos Montt es pública y de intereses fácticos de poder, por ello de cara a las elecciones y el negocio que ofrece el PPP, las PAC han revestido su accionar y al amparo del gobierno reactivaron su comportamiento paramilitar en zonas del Petén, Mazatenango, Alta Verapaz y Huehuetenango, actuando de forma conjunta con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), organización conservadora estructurada por ex soldados y patrulleros.

Desde 1999 a la fecha, la tendencia de las actuaciones paramilitares es incremental, expropiando terrenos, secuestrando a campesinos y líderes comunitarios, quemando ranchos, robando animales, ajusticiando a los delatores y querellantes que se han atrevido a entablar juicios contra los atropellos militares.

No sólo actúan en Guatemala, los brazos del sicariato llegan hasta Chiapas, México, donde ofrecen sus servicios a propietario de fincas de café y ganaderos para confrontar a los simpatizantes del EZLN.

Los puentes del Plan Colombia con el PPP

En Colombia se ha iniciado un proceso de privatización acelerado en 13 electrificadoras donde el estado era el accionista mayoritario. Los pretextos que se esgrimen son las dificultades de inversión por el gobierno, la demanda creciente de energía por parte de la población, los atentados en las torres de conducción de energía que ha ocasionado la guerrilla y el interés de empresas norteamericanas por invertir en el país, aunque esto último es curioso, porque mientras la prensa desacredita los destinos turísticos colombianos por el grado alto de inseguridad y ola de secuestros, por otra parte presiona por la vía diplomática para invertir en el país.

Las compañías en venta, en la Fase Uno, y que han sido objeto de inversión foránea se encuentran ubicadas en la zona centro y centro sur de país, lugares donde se dirime el conflicto y son la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), Empresa de Energía de Cundinamarca y las electrificadoras del Quindío, Huila, Meta y Caquetá.

La Segunda Fase se concentrará en la capitalización de las centrales Eléctrica de Norte de Santander, Electrificadora de Santander, Centrales Eléctricas de Nariño y Electrificadora de Cauca.

Lo relevante en este proceso de privatización es que la Fase Uno se encuentra ligada de manera fronteriza con la Zona de Distensión en la administración Pastrana, creada el 7 de noviembre de 1998, lo cual fue un ingrediente determinante para que se rompieran las negociaciones los días 20 y 21 de febrero del 2002.

En esta zona se encuentra enclavada la Base Militar de Tolemaida, colindando con Cundinamarca, conformada por tres brigadas móviles de 1.200 hombres armados; en Neiva, Capital del Huila, existe la XII Brigada del Ejército con 3.000 soldados, fuerzas especiales

y una flotilla de tanques Cascabel. A estas fortalezas militares se le agregan los corredores estratégicos de Florencia con 2.000 soldados, la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur en el Putumayo con 5.000 personas y la Séptima Brigada con sede en Villavicencio.

La Fase Dos contempla los Departamentos de Santander, Santander del Norte, Nariño y Cauca, zona oriental y sur occidental de Colombia, respaldada militarmente por la colindancia con Ecuador y sede de la Base Militar Manta.

El armamento que se utiliza en cada acción bélica varía, pero el arsenal tiene un repertorio amplio, desde lancha Pirañas, helicópteros Black Hawk y Arpía, aviones Hércules y C-130, OV-10 y Avión Plataforma.

Como podemos ver, las privatizaciones en el ramo eléctrico no tienen riesgo porque se encuentran resguardada por el ejército nacional, las acciones del gobierno de Álvaro Uribe y por la recién creada Red de Informantes, que son paramilitares oficializados. La pregunta que asalta la razón es ¿Seguirá marcando esta tendencia la instrumentación del Plan Puebla Panamá?

¿Se convertirá la Red de Informantes en un recurso político para aplicarse en las zonas donde nazca el conflicto por la ola de privatizaciones y expropiaciones de tierra? ¿Se acuerparán los campesinos desplazados y expropiados de sus tierras en un ejército de informantes para facilitar las tareas de los paramilitares? ¿Ante la escasez de empleo, será la Red de Informantes una oportunidad para obtener un salario? ¿Seguirán organizándose ejércitos paramilitares para actuar donde el estado no quiere comprometerse?

Esos interrogantes, por un lado, son preguntas de investigación que ha comenzado a tener respuesta por los acontecimientos en Chiapas, Guatemala y El Salvador. Por otro lado, se avizora un adelgazamiento de la sociedad civil colombiana frente a un incremento de la sociedad política, en la medida que se está incorporando a un grueso de la población en acciones militares, aunado a ello, está el llamado que hace a los 20 mil miembros retirados de la policía y a los reservistas menores de 45 años para que coadyuven en las tareas del estado para combatir a los insurgentes armados.

El futuro de la región, dado el soporte que nos brinda los datos obtenidos, es incierto, cargado de temor, lleno de violencia y desgarramientos al interior de la sociedad civil, sin que se asome un hálito de esperanza para los colombianos que desde hace años esperan el tranvía de la paz.

Recursos militares del PPP

El Salvador: Base permanente de inteligencia y de monitoreo en la Embajada norteamericana de San Salvador, la cual es más grande que la de los demás países de América Latina.

El Plan Nuevos Horizontes de Estados Unidos para realizar ejercicios conjuntos de fuerza de tarea con el Ejército de Guatemala en la región de El Petén, desde febrero-mayo del año 2000, frontera de México; este programa ya se ha realizado en El Salvador, participando Guatemala también.

La misión de Nuevos Horizontes es estrictamente de entrenamiento y de “apoyo” humanitario. No es operación antinarcóticos, pero sí una combinación cívico-militar. El ejercicio realizado en Chalatenango fue dirigido por el Coronel Clayde Leavelle, quien en 1990 estuvo en Arabia Saudita en la Operación Tormenta del Desierto y se desempeñó

como oficial ejecutivo de batallón. Este Coronel Leavelle es especialista en artillería, defensa aérea, paracaidismo y combate aéreo de fuerza rápida.

En El Salvador la operación cívico militar se denominó Fuerza de Tarea Conjunta Santa Fe, en el contexto de Nuevos Horizontes 2000 y de penetración comunitaria, para ello se construyeron dos cocinas, una clínica; se perforaron diez pozos y se rehabilitaron caminos; se atendieron en consulta 30 mil personas y 10 mil animales.

Para el ejercicio del 2001, ya realizado, se eligió El Petén como lugar idóneo.

Y los proyectos planificados fueron:

Construcción de una escuela y un pozo en Yaxal y El Porvenir; escuela en Redentor, El Arrozal y Morales; pozos en Zocotzal, Panorama y La Granja, y asistencia médica en Las Cruces, Rancho Alegre, La Libertad, El Chal, Dolores, La Máquina, El Zapote y El Remate.

En las fronteras de Honduras con Nicaragua, previo a las elecciones de noviembre del 2001, y ante una contingencia que diera el triunfo al FSLN, se activaron los grupos paramilitares desde finales de julio del presente, los cuales estaban conformados por exmilitares y ex policías que se han aglutinado alrededor de unos “Comités de Defensa Cívicos” y funcionan como factor coadyuvante de los cuerpos oficiales.

Actúan en zonas fronterizas con Nicaragua, cuentan con entrenamiento militar y desarrollan labores como autoridades; no hay que olvidar que la Base Militar de la época de los “Contra” aún existe: Palmerola.

Se agregan a Palmerola las bases militares de San Pedro Sula, Cucyagua, Tegucigalpa, San Lorenzo, La Ceiba, Trujillo, Puerto Lempira y Dursuna. Esta por construirse la base militar en Los Cayos Miskitos en el litoral norte.

En la frontera Guatemala-México, el desplazamiento de los Kaibiles guatemaltecos, desechados por el ejército de ese país por los Acuerdos de Paz, se ha dado hacia el estado de Chiapas a lo largo de la franja fronteriza de Las Margaritas y La Trinitaria y según testimonios recogidos, se emplean como fuerza paramilitar de los ganaderos y cafetaleros de la zona sin que sean divisado por la base militar del ejército mexicano de Amparo y Aguatinta; además, actúan como agentes amedrentadores en los municipios autónomos de Tierra y Libertad.

Lo que preocupa a los inversores del PPP

El PPP por sus recursos petroleros y el potencial eléctrico es un bocado apetecido por las Corporaciones Multinacionales, toda vez que han decidido innovar en el área de los nuevos negocios la fusión entre petróleo y sector eléctrico, conocido como petroeléctrica.

La nueva industria petroeléctrica que se pretende constituir en la región del PPP busca tesoneramente el retiro del Estado de esas áreas estratégicas, a fin de que los inversores extranjeros puedan ampliar las redes de producción y distribución de gas, petróleo y privatización de las compañías generadora de electricidad lo que redundaría en una mayor acumulación de capital y jugosas ganancias. No obstante, hay nubarrones que despejar para que el proyecto se instale en la zona.

Una de las preocupaciones, misma que tienen que resolver los Estados de cada país incluido en el PPP, es saber distribuir la población de 27.5 millones de habitantes, porque sólo un 35% está en posibilidad de ser incorporada en los programas de envergadura, el 65% restante será población residual; sin embargo la privatización de los servicios públicos (agua, energía, alcantarillado, carreteras, etc.) va a afectar a toda la población, a ello habría que sumarle el déficit de infraestructura en servicios de salud, vivienda, educación, vías de comunicación, y agua potable, lo que se convierte en una potencial bomba de tiempo para que estallen conflictos sociales.

Otro factor inquietante es que los gobiernos y partidos políticos centroamericanos han construido su poder y áreas de influencia a través de una política de concesión, paternalismo y corporativismo que les ha redituado beneficios en un corto plazo; sin embargo, el PPP tiene contemplado un acotamiento al papel de los gobiernos centroamericanos para que no sean protagonistas de primera línea, sino de interlocutores de mediación, porque las grandes decisiones estarán en los organismos financieros, los empresarios y el gobierno norteamericano. Todo ello abre una interrogante mayúscula ¿Cuál va ser el desempeño político de los líderes políticos centroamericanos cuando se vean marginados de los grandes negocios y con un perfil bajo en la política?

La reorganización de los ejércitos y las policías nacionales en Nicaragua, El Salvador y Guatemala pasó por un grado de dificultad en las negociaciones por la paz, se dieron concesiones a los grupos armados, en algunos casos, y en otros se abrieron espacios en la policía privada o bancaria para que se enrolaran, sin que esto haya desmontado las diferencias que existen; ahora se pretende agregar una policía regional que ataque los problemas de narcotráfico, tráfico de indocumentados y del terrorismo, pero bajo una coordinación de elite con agencias especiales de los EE.UU., entre ellas la DEA y los encargados de la política hemisférica del Departamento de estado. ¿Se podrá trabajar en conjunto conociendo la red y tráfico de influencia y corrupción que existe entre ellos?

Otra asignatura pendiente es de que manera se va a asegurar militarmente la custodia de la potencial conectividad eléctrica en la región, lo cual nos refiere al proyecto de inversión de alguna empresa transnacional que está dispuesta a incursionar en el mercado de generación eléctrica, y que sin duda llevará a la privatización de los últimos activos públicos como son las plantas geotérmicas e hidroeléctricas.

Por último, La construcción de carreteras y puentes podría ser beneficiosa para los consumidores y comunidades en algunos casos, en otros se lesionaran intereses comunitarios, aunque ello no es automático. Se va requerir mucha negociación ante las presiones y movilizaciones sociales sin violentar el marco jurídico e institucionales, lo cual no va a ocurrir, si nos atenemos a la experiencia de San Salvador Atenco, donde el conflicto estuvo de por medio para detener la expropiación irracional que pretendía el gobierno mexicano, vulnerando todos los derechos de una comunidad.

Así se muestra el PPP, complejo, conflictivo y militarizado pero con grandes ganancias para las empresas inversoras, aunque el dinero que brote de esas nuevas empresas va estar teñido de sangre campesina, de desgarramientos comunitarios y de violencia en muchos lugares de la región.

INTERES POR AL PACIFICO COLOMBIANO

La Cuenca del Pacífico colombiano tiene un área de 49.930 kilómetros cuadrados, con 1300 kilómetros de costas y está conformado por 23 municipios pertenecientes a los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó.

Su población está compuesta fundamentalmente por los grupos étnicos negro e indígena. Ambos condenados históricamente a la marginación, negación, exclusión y muerte. El Pacífico Colombiano lo constituye, paradójicamente, un pueblo pobre en un territorio rico, que podemos sintetizar de la siguiente manera:

Miseria del pueblo.

- * En promedio, el 79.7% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, según cifras del DANE.
- * La esperanza de vida en la región es de 55 años mientras el promedio nacional es de 64 años.
- * El 56% de las familias tiene un ingreso inferior al salario mínimo; de éstas, un 70% tiene ingresos inferiores a los \$10.000 mensuales.
- * Sólo el 29% de las viviendas cuentan con servicios públicos completos. El 15% cuenta con alcantarillado y el 23% con agua potable.

Riqueza del territorio.

La Costa Pacífica hace actualmente el siguiente aporte a la producción nacional:

- * El 69% de la pesca marítima. El potencial de pesca marítima está situado entre 120.000 y 160.000 toneladas anuales. Actualmente sólo se producen 13.641 toneladas.
- * El 70% de la materia prima para la industria pulpera.
- * El 42.23% de la madera aserrada. El volumen de bosque es de 198 millones de metros cúbicos de los cuales el 17% es reserva forestal.
- * El 82.17% del platino (850.000 dólares).
- * El 18% de oro (49 millones de dólares)
- * El 13.84% de la plata (437 millones de pesos).
- * Se encuentran yacimientos de minerales de importancia estratégica destinados a la siderurgia, la electrometalurgia, la industria aeroespacial y la producción de energía nuclear: bauxita, manganeso, cobalto radioactivo, estaño, cromo, níquel y petróleo.1

El Chocó en particular reviste gran importancia estratégica dada su especial ubicación como punto de encuentro de los dos océanos, y centro donde han fijado su atención las políticas mundiales para el desarrollo del mar del siglo XXI.

El Departamento del Chocó tiene una superficie de 44.935 kilómetros cuadrados y casi medio millón de habitantes. Limita al norte con la república de Panamá y el mar Caribe; por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con el Valle del Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico.

El departamento del Chocó es uno de los más lluviosos de Colombia -de ahí sus numerosos ríos- que unido a las altas temperaturas mayores de 30 centígrados, de las tierras bajas, mantienen una alta humedad y exuberante vegetación. Por este motivo el Chocó ofrece una de las mayores riquezas en recursos naturales del país.

El Chocó es territorio compartido tradicionalmente entre negros, indígenas y mestizos.

REALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Hacen presencia tres grupos indígenas: Embera, Wounaan y Tule. Los Embera a su vez están conformados por varias subfamilias: Embera de río, Katíos y Chamí.

En conjunto según el censo de 1994 sumas 31.403 personas distribuidas en 5631 familias y 219 comunidades que representan el 8.61% de la población total del departamento del Chocó.

En la actualidad en el departamento del Chocó se han constituido 83 resguardos indígenas y 13 más se encuentran listos para ser aprobados por la Junta Directiva del INCORA. Estos resguardos representan aproximadamente el 70% de la territorialidad tradicional o que forman parte de su hábitat; es decir, que falta un 30% de su territorialidad por ser titulada en forma de resguardo. El 23.3% del área total del departamento corresponde a la territorialidad de los pueblos indígenas.

En las 219 comunidades indígenas, existen solamente 170 escuelas, la mayoría de ellas en mal estado y fuera de ello, sólo existen unos 130 maestros con deficiente capacitación. Sólo 59 maestros están en proceso de profesionalización para obtener su título de normalistas.

Casi el 80% de las comunidades tiene promotores voluntarios de salud, pero la mayoría de ellos con mala preparación. Son muy pocos los promotores que hayan sido nombrados por el Servicio Seccional de Salud. En la mayoría de las comunidades no han funcionado o han entrado en franco deterioro las llamadas boticas comunitarias.

Actualmente los resguardos indígenas diseñan algunos programas de inversión gracias a los recursos que por concepto de Transferencia Presupuestal les cede el gobierno.

El PPP en el marco de la nueva guerra

La nueva guerra, tomando como referencia las construcciones teóricas de Martin Shaw (Guerra Degenerada) y Mary Kaldor (Nueva Guerra) no es una respuesta a los desafíos que les imponen los sujetos insurrectos, sino una consecuencia de varios factores que imbricados y aplicados, han alterado las formas de confrontar, pero más que eso, también han obligado al otro (los nuevos enemigos) a cambiar las tácticas y estrategias de lucha; a innovar prácticas políticas que no se conocían en la agenda de las confrontaciones interactorales y a vincular factores internacionales, tecnológicos, comunicacionales y mediáticos en la batalla. En fin, hay nuevos ingredientes pero también nuevo sentido en algunos comportamientos.

En núcleo de donde se aprecia el punto de partida de la Nueva Guerra esta compuesto por múltiples variables: La reducción de la autonomía estatal, la desintegración del Estado decimonónico, la pérdida del monopolio de la violencia y el despojo que le hacen al Estado de los controles del monopolio mencionado por parte del crimen organizado y sectores privados; la pérdida de centralidad del espacio político para dotar de sentido colectivo sus acciones y elaborar discursos orientadores para organizar el mundo y la oferta de los procesos de globalización en el ámbito de las relaciones militares y comercio de armas y la conformación de cuerpos de elite que manipulan diversos intereses económicos y bélicos en conflictos legendarios y ajenos a su territorio, pero que son enrolados bajo la nueva estrategia del terrorismo internacional a través de alianzas militares mundiales.

Nueva Guerra y terrorismo internacional son las dos caras de la misma moneda, porque la justificación para que un Estado use la fuerza bélica de manera unilateral es el fantasma del terrorismo, no obstante la razón de peso es la expansión económica, el monopolio de los recursos no renovables y el dominio de zonas estratégicas.

El terrorismo es una práctica censurada drásticamente, sin embargo hay muchas cosas nuevas que se esconden bajo ese concepto, en el umbral del Siglo XXI, pero pocos se atreven a discernir sobre ellas.

Atacar sin avisar, actuar de manera súbita, organizar la guerra sin arriesgar a sus combatientes, usar los recursos tecnológico para la precisión de los bombardeos, eliminar a todo aquello que no sea igual a occidente, discriminar las diferencias étnicas, religiosas y culturales, universalizar los valores particulares, sembrar el terror y miedo en las poblaciones y expulsarlas de sus territorios, son las características de la Nueva Guerra, lo cual sitúa a los países poderosos y propietarios de recursos tecnológicos (bélicos y comunicacionales) a imponer el proyecto hegemónico militar vigente.

Todo acto belicoso contra un territorio, país, comunidad, grupo o persona está expuesto a una respuesta del agredido y la revitalización de las acciones terroristas es una de ellas. Justo aquí, el terrorismo deja de ser un acto y sume el comportamiento de acción guerrera para atacar al enemigo.